

La violencia mapuche se encona en Chile sin que la llegada de Boric al Gobierno pause el conflicto

En 2021 hubo un salto en la confrontación: grupos extremistas llamaron a la lucha armada y Piñera respondió con un estado de excepción prolongado

° *Entre octubre de 2021 y marzo de 2022 el Ejército ha estado desplegado en la llamada Macrozona Sur, a 600 Km de Santiago, que engloba el área de La Araucanía.*

° *Boric ha prometido diálogo y promueve que la nueva Constitución incluya reconocimiento y derechos para los mapuches, pero los radicales siguen en armas.*

° *El primer gesto del nuevo presidente –enviar a la zona conflictiva a un grupo de ministros encabezados por la titular de Interior–, fue acogido a balazos contra la delegación.*

CAROLINA FERRO

En el último año el conflicto mapuche se ha recrudecido en Chile, con llamamientos a la lucha armada realizados por grupos radicales y el establecimiento y prórroga del estado de excepción en zonas de la Araucanía desde octubre de 2021. El nuevo presidente chileno, Gabriel Boric, se propone marcar un cambio en esa dinámica, si bien organizaciones extremas mapuches advierten de que sus exigencias se mantienen en pie independientemente de quién gobierne en La Moneda.

El conflicto viene de siglo y medio atrás, desde que en 1883 finalizó la incorporación efectiva de la Araucanía al Estado chileno (el pueblo araucano, como entonces era conocido, se movía entre Chile y Argentina debido a que en esa zona de la Patagonia los Andes tienen menos altitud; en suelo argentino también continúa esa presencia cultural, aunque con menor fuerza que en el caso chileno). Desde entonces, la población autóctona de esa región, que se extiende a partir de 600 kilómetros al sur de Santiago, viene reclamando el derecho a sus tierras ancestrales, arrebatadas primero por la administración colonial española y luego, a partir de la independencia del país, en manos de muchos casos de empresas forestales y de hacendados. La expansión de la industria maderera, que explota cerca de 3 millones de hectáreas de

bosques y es responsable del 8% de las exportaciones del país, acentúa además el contraste entre los beneficios empresariales y las exiguas condiciones socioeconómicas de gran parte del pueblo originario de la región. Por lo demás, las reivindicaciones locales plantean también un reconocimiento expreso de los pueblos indígenas en la Constitución.

Unos dos millones de chilenos –el 12% de la población– desciende del pueblo mapuche, si bien muchos no se identifican con esa minoría. La mayor parte de los mapuches viven con tranquilidad sus tradiciones culturales y aunque un buen número aboga por un mayor reconocimiento social y jurídico, solo algunos grupos radicalizados recurren a la violencia.

Etapas

El conflicto cobró relevancia con el regreso de Chile a la democracia tras la dictadura de Pinochet. El cambio político prometía un reconocimiento constitucional y la entrega de tierras a los mapuches. La insatisfacción con el poco avance en esa dirección llevó a grupos mapuches a reaccionar con protestas, ocupación de tierras y ataques. Acciones violentas y no violentas se dieron en cinco etapas. De 1990 a 1997 la actividad de los mapuches se centró en la protesta social y la ocupación de tierras. Entre 1998 y 2002 se dio una transición de la protesta social a la violencia política, por entender sus



En verde, regiones de Bío-Bío y Araucanía, donde el Gobierno aplicó el estado de excepción

impulsores que no estaban consiguiendo sus objetivos. De 2003 a 2007 se redujeron los ataques debido a las mayores medidas de seguridad aplicadas por el Gobierno, pero acciones violentas, como la inutilización de maquinaria y la amenaza física, se convirtieron en métodos usuales por parte organizaciones extremistas. A partir de 2008 se dio un aumento de los ataques, que tuvo como efecto una desmovilización de la causa mapuche; desde 2011 se vive un proceso de radicalización aún mayor, con el incremento del uso de armas de fuego por parte de los grupos de activistas mapuches y una general intensificación del conflicto.

Ese proceso ha llevado a que en el último año se haya dado un salto en la conflictividad. A comienzos de octubre, activistas radicales

mapuches apareciendo por primera vez en un video con armas largas y llamando a la “lucha armada” contra las fuerzas de seguridad que fueran a penetrar en sus tierras (un mensaje repetido un mes después). Por su parte, el Gobierno decretó el 12 de octubre el estado de excepción y envió al Ejército a la llamada Macrozona Sur (a las provincias Arauco y Biobío, de la región Biobío, y a las de Cautín y Malleco, en la región de La Araucanía), en una decisión que la oposición política insistió en criticar.

Tres son los grupos armados mapuches que están detrás del incremento de la violencia: Coordinadora Arauco Malleca (CAM), Weichan Auka Mapu (WAM) y la Resistencia Mapuche Malleco (RMM). Estos grupos han usado ataques terroristas como medio para demandar la entrega de tierras y la autonomía territorial como parte de un proceso de “libre determinación” indígena. Estos grupos realizan acciones contra la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que administra y explota parte de las tierras; por ejemplo, inutilizando maquinaria y robando de madera de esa entidad, en ataques que también llevan a cabo contra otros grandes propietarios. El Estado les acusa de que, con el fin de financiar su causa, esos grupos han establecido lazos con el narcotráfico y con el crimen organizado. Otros residentes de la región se alinean con el Gobierno, afectados por el clima de inseguridad en el que se encuentran.

Medidas

El conflicto forma parte muy fundamental de la política interior de todos los gobiernos. En 1993 se implementó el Fondo de Tierras y Aguas como modo de resolver la disputa, pero ello no colmó las aspiraciones mapuches. En su vuelta a la presidencia, Sebastián Piñera propuso el Plan Impulso Araucanía, con una inversión de más de 8.000 millones de dólares en un plazo de 8 años; en junio de 2021, el 33% de los proyectos del plan ya se habían terminado y otros 51% estaban siendo ejecutados, según el propio Piñera. Si embargo, el conflicto no se redujo, sino que se pasó al estado de excepción decretado en octubre y luego prorrogado por el Congreso hasta el 11 de marzo de 2022, cuando ya fue efectivo el cambio presidencial.

El Gobierno de Piñera justificó entonces la medida asegurando que en lo que iba de 2021 se habían cometido unos 1.500 actos de violencia en la Macrozona Sur, lo que suponía un incremento del 46% respecto a 2020, y se habían detenido 460 personas, lo que representaba algo más de la mitad de todas las detenciones realizadas en los últimos cuatro años en relación con este conflicto.

La llegada de Gabriel Boric a La Moneda, con una promesa de diálogo y comprensión hacia ciertas reivindicaciones mapuches, no ha significado de momento una tregua en la violencia. Boric se propuso dialogar “con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz” y consideró contraproducente el

estado de excepción aplicado por su antecesor. También dijo comprometerse a que los derechos de los pueblos originarios queden reconocidos y protegidos en la nueva Constitución que se está redactando. Por su parte, los grupos radicales respondieron que no van a tratar de forma blanda al nuevo Gobierno por el hecho de que sea de izquierda. En un comunicado, la CAM advirtió a la “nueva izquierda, hippie, progre y buena onda” gubernamental que el pueblo mapuche no renunciará a su propio ordenamiento político-militar. De hecho, el grupo de ministros enviados por Boric a la Araucanía, encabezados por la ministra del Interior, Izkiá Siches, fue recibido a balazos. ●